

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

**OBJETO:** *CONCEPTUAR SOBRE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO-VALLE DEL CAUCA, CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN ESE MUNICIPIO*

Con el fin de emitir concepto ante la contratación derivada de calamidad pública, me permito citar los artículos 1 y 4 del Acto legislativo No 04 del 18 de septiembre de 2019, los cuales establecen:

*Artículo 1 “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (...)*

*(..) La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales.*

*Artículo 4. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la República”.*

Consecuentemente, en el numeral 5 del artículo 4 y en el artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, se define la calamidad pública como:

*“El resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción”.*

Así mismo, la aludida Ley 1523 de 2012, define específicamente el término desastre, en la forma que debe ser comprendido para el desarrollo de la materia que regula la norma, así:

*“Artículo 55. Desastre. Para los efectos de la presente ley, se entiende por desastre el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.”*

Por su parte, el artículo 66 de la norma en comento, estableció las medidas especiales de contratación para los contratos celebrados en pro de la ejecución de actividades de respuesta y reactivación de las zonas afectadas por la calamidad pública, y así mismo dispuso que tales contratos deben ser sometidos al control fiscal dispuesto para las declaratorias de urgencia manifiesta en los términos de los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, tal como se cita:

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*“Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.*

*Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen”.*

Ahora sobre la figura de la Urgencia Manifiesta, en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, Se concibe como:

*“Artículo 42º.- De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.*

*La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.*

*Parágrafo. - Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.”*

Así mismo el artículo 43 de la precitada norma, impuso el deber a las autoridades administrativas de enviar el expediente contractual abierto con ocasión de la urgencia manifiesta y los actos administrativos que dieron lugar a ello, a los entes de control fiscal:

***“Art. 43 Ley 80 de 1993. Del Control a la Urgencia Manifiesta. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas y de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración.***

*Si fuere procedente dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento*

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.*

*Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia”.*

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, estableció las modalidades de selección de contratistas, dentro de las cuales contempló la contratación directa, determinando los casos en que procede tal modalidad:

*“Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:*

*(...)*

**4. Contratación directa.** *La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:*

*a) Urgencia manifiesta;*

*b) Contratación de empréstitos;*

*(...)*

**Parágrafo 1°.** *La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar.*

*(...)*

Cabe aclarar que el uso indebido de la contratación de Urgencia manifiesta puede llegar a constituirse gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal, conforme lo establecido en el artículo 126 del Decreto 403 de 2020.

Por consiguiente, se procede a realizar el estudio de la situación que conllevó a la contratación que se relaciona en este documento.

## **I. ANTECEDENTES**

1. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del municipio de San Pedro - Valle, como consta en acta de reunión extraordinaria realizada el 19 de marzo de 2020, sesionó a efectos de tratar el problema de salud pública que amenaza a todos los habitantes del municipio de San Pedro de llegar el virus COVID 19, dada la cercanía del municipio de Guadalajara de Buga donde ya hay un primer brote de contagio del coronavirus (COVID-19), y ver la forma de cómo hacer frente en ese municipio de tal amenaza; teniendo en cuenta que es obligación del estado proteger la integridad de las personas, la salud, y la vida, por lo cual el CMGRD concluyó y votó favorable por unanimidad que era necesario adelantar acciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica, la organización de la red de servicios, el desarrollo de medidas preventivas y de control, aspectos de comunicación, educación a la comunidad y capacitación a todo el personal de salud en esa localidad vallecaucana y declarar la calamidad pública y urgencia manifiesta, motivo por el cual el Alcalde Municipal expidió el

120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

decreto N°046 del 23 de Marzo de 2020 *MEDIANTE EL CUAL DECRETA LA CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO-VALLE DEL CAUCA*, resolviendo dar aplicación al régimen normativo especial para situaciones de calamidad pública contemplado en el capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 y de urgencia manifiesta en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993.

2. Con fundamento en la situación calamitosa, se suscribió doce (12) contratos por valor total de \$294.402.978, cuyas características generales son como se exponen:

| CONTRATISTA                     | Número y fecha de contrato | Plazo   | Objeto del contrato  | Valor del contrato |
|---------------------------------|----------------------------|---------|--|--------------------|
| J.L.G. LIMPIEZA<br>TECNICAS SAS | UM-01<br>24/03/2020        | 15 días | <i>“Suministro de elementos e insumos necesarios para realizar las acciones de prevención, contención y mitigación de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Municipio de San Pedro”</i> | \$38.879.000       |
| CARLOS ANTURO<br>LONDOÑO MARIN  | UM-02<br>1-04-2020         | 15 días | <i>Suministro de Kits de alimentos para atender la calamidad publica</i>   | \$49.950.420       |
| WILSON GERMAN<br>AGUDELO ANGEL  | UM-03<br>6-04-2020         | 50 días | <i>Prestación de servicio para desinfectar las personas y vehículos que ingresan y salen del casco urbano del municipio</i>  | \$25.000.000       |
| MAIRA ALEJANDRA<br>NUÑEZ        | UM-04<br>8-04-2020         | 90 días | <i>Prestación de servicio para la realización de campañas de prevención para la mitigación del riesgo en la propagación del virus COVID 19, con la comunidad Sanpedreña</i>                  | \$4.500.000        |
| PAULA ANDREA<br>JARAMILLO LOPEZ | UM-05<br>8-04-2020         | 90 días | <i>Prestación de servicio para la realización de campañas de prevención para la mitigación del riesgo en la propagación del virus COVID 19, con la comunidad Sanpedreña</i>                  | \$4.500.000        |
| VIVIANA OSORIO<br>PINEDA        | UM-06<br>15-4-2020         | 90 días | <i>“Prestación de servicios de campañas de prevención para la mitigación del riesgo de contagio del virus COVID 19 en la comunidad San Pedreña”</i>  | \$4.500.000        |

120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

|                               |                    |         |  |              |
|-------------------------------|--------------------|---------|--|--------------|
| GUIL FREDY MUESES             | UM-07<br>16-4-2020 | 60 días | "Prestación de servicios de alquiler de baño portátil para personas de puesto de desinfección de vehículos y personas que ingresan y salen del municipio"  | \$2.742.000  |
| LINA MARCELA MEJIA LEMUS      | UM 08<br>17-4-2020 | 90 días | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 CON LA COMUNIDAD SANPEDREÑA, PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MPIO SAN PEDRO".   | \$4.500.000  |
| BETTY AMPARO VELASCO MUÑOZ    | UM 09<br>17-4-2020 | 90 días | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 CON LA COMUNIDAD SANPEDREÑA, PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO  | \$4.500.000  |
| GINA ANDREA HERNANDEZ HERRERA | UM 10<br>17-4-2020 | 90 días | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 CON LA COMUNIDAD SANPEDREÑA, PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO2   | \$4.500.000  |
| CARLOS ARTURO LONDOÑO MARIN   | UM 11<br>23-4-2020 | 30 días | COMPRAVENTA DE KITS DE ALIMENTOS PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DPTO. DEL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO AL DECRETO NUMERO 046 DEL 23 DE MARZO DEL 2020 Y EL PLAN DE ACCIÓN COVID-19 APROBADO POR EL CONCEJO MPAL DE GESTION DEL RIESGO | \$96.183.558 |



**120.08.03**

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

|                                  |                    |         |   |              |
|----------------------------------|--------------------|---------|---|--------------|
| COLOMBOQUIMICOS FARMACEUTICA SAS | UM 12<br>24-4-2020 | 15 días | SUMINISTRO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, EN EL HOSPITAL LOCAL ULPIANO TASCÓN MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA. | \$52.890.000 |
|----------------------------------|--------------------|---------|---|--------------|

- Allegado mediante correo electrónico a la CDVC, último reporte el 16 de abril de 2020, los contratos celebrados en virtud de la calamidad pública y urgencia manifiesta, junto a los antecedentes administrativos de la actuación que motivaron la declaratoria de la calamidad pública y urgencia manifiesta, se procede a emitir el pronunciamiento a que haya lugar de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 y artículo 43 de la ley 80 de 1993.
- Por lo anterior, en el término de dos (2) meses la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir el pronunciamiento a que haya lugar de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 y artículo 43 de la ley 80 de 1993.

**II. DE LOS HECHOS Y CIRCUNTANCIAS QUE MOTIVARON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA.**

Respecto de los actos administrativos mediante los cuales se declaró la calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta, en ellos se determinó su motivación bajo argumentos que contemplan las circunstancias y hechos que dieron lugar a la calamidad y al uso de la figura de urgencia manifiesta, en los siguientes términos:

**“CONSIDERACIONES**  
(...)

5. Mediante la circular N°0017 del Viceministerio de Relaciones Laborales fechada 24 de febrero de 2020 señala las directrices a tomar frente al riesgo de contagio con el virus COVID 19.

6. El Ministerio de Salud y Protección social, mediante la Resolución No.0000380 del 10 de marzo de 2020 adopta medidas preventivas sanitarias en el país por causa del coronavirus COVID 2019 y se dictan otras disposiciones.

7. La Procuraduría General de la Nación mediante directiva No.006 del 10 de marzo de 2020, señala para gobernadores, alcaldes distritales y municipales, secretarios departamentales, distritales y municipales de salud, empresas administradoras de planes de beneficio, instituciones prestadoras de servicio de salud, personeros distritales y municipales, las acciones que se deben tomar para la implementación de los planes de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del nuevo coronavirus COVID 19 en el territorio nacional.

8. El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No.385 del 12 de marzo de 2020: Declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19 y adopta medidas para hacer frente a este virus”.

**120.08.03**

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*9. La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en cabeza de la Doctora CLARA LUZ ROLDAN, MEDIANTE EL Decreto No. 1-3-0666 del 12 de marzo de 2020 dicta medidas de protección frente al coronavirus “COVID 19” señalando otras disposiciones al respecto.*

*10. Con el Decreto No.1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 la misma Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca declara la situación de calamidad pública en este Departamento por ocasión del COVID 19”.*

*11. La presidencia de la República de Colombia mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Declara el Estado de Emergencia Económica, Ecológica y Social en todo el territorio Nacional”.*

*12. La Administración municipal de San Pedro Valle, en cumplimiento de los actos administrativos emitidos por las diferentes entidades de orden Internacionales OMS, Departamentales, Nacionales todos referentes al cumplimiento del orden Constitucional, dicta el Decreto No.043 de Marzo 17 de 2020, adopta medidas sanitarias y acciones transitorias de policía, para la prevención y mitigación del riesgo de contagio con ocasión de la situación epidemiológica ocasionada con el coronavirus COVID 19 en el Municipio de San Pedro Valley se dictan otras disposiciones”.*

*13. Que en acta No. 03 del 19 de marzo de 2020 del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, dada la situación y la posibilidad de riesgo por contagio del COVID 19, por mayoría absoluta aprueban la Declaratoria de Calamidad Publica en el Municipio de San Pedro.*

*(...)”*

**III. DE LOS DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA CON BASE EN LOS CUALES SE EMITE EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO**

Para el efecto de este concepto, abordaremos los documentos que se allegaron al organismo fiscalizador, sobre el contrato que se ejecutó con cargo al presupuesto municipal de San Pedro-Valle del Cauca, como aparece glosadas en la correspondiente carpeta a saber una carpeta, así:

1. Copia del Decreto N°. 046 de marzo 23 de 2020 por medio del cual se declaran la Calamidad Pública y Urgencia manifiesta en el Municipio de San Pedro Valle del Cauca.
2. Copia del acta No. 03 de marzo 19 de 2020 de la reunión extraordinaria CMGRD del municipio de San Pedro-Valle.
3. Copia de los contratos: N°UM-01 de 24/03/2020; N°UM-02 de 01/04/2020; N°UM-03 de 06/04/2020; N°UM-04 de 8/04/2020; N°UM-05 de 8/04/2020; N°UM-06 de 15/04/2020; N°UM-07 de 16/04/2020; N°UM-08 de 17/04/2020; N°UM-09 de 17/04/2020 y N°UM-10 de 17/04/2020.
4. Copia del Plan de acción específico para atención y ayuda humanitaria, así mismo su actualización.
5. Copia de la Disponibilidad y Registro Presupuestal que respaldan los Contratos N° UM 01 para la compra de insumos; N° UM 011- compra de kits alimenticios y N° UM 12 compra de equipos para el hospital.
6. Copia del oficio mediante el cual al Alcalde acepta la designación como Entidad pública ejecutora de los proyectos BPIN 2020766700001 – FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN SAN PEDRO.
7. Copia del Decreto N°60 del 13 de abril de 2020, definición directa de Proyectos de Inversión Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías –SGR.

**120.08.03**

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

**IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

Sea lo primero advertir que este pronunciamiento se hace de manera objetiva, guardando con rigor los principios establecidos en el canon 209 de la Norma Superior, en los cuales se desarrolla y fundamenta la función administrativa, considerando para tal propósito únicamente la prueba documental allegada a la Contraloría Departamental del Valle, consistente en los antecedentes administrativos que dieron origen a la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta por parte del Alcalde Municipal de San Pedro Valle del Cauca y los actos contractuales que para conjurar la misma se celebraron.

Para el efecto se requiere practicar un estudio sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad legal que regula la materia de situaciones de calamidad pública y desastres en Colombia.

Así se tiene que, partiendo del hecho que la máxima autoridad administrativa del Municipio de San Pedro, procedió a realizar la actividad contractual bajo el sustento de responder a la Calamidad Pública resolvió mediante el Decreto N°046 del 23 de marzo de 2020, e invocando la Ley 1523 de 2012 como régimen especial para proceder a la práctica de la contratación directa, se hace necesario citar a continuación el articulado respectivo para su análisis:

**“LEY 1523 DE 2012  
(abril 24)**

***Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones***

(...)

*Artículo 57. Declaratoria de situación de calamidad pública. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de (sic) situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre.*

En cuanto a la declaratoria de situación de calamidad pública, el artículo 57 de la norma en comento establece que el Alcalde municipal podrá proferir el decreto que la declara, siempre y cuando cuente con el concepto favorable del CMGRD del municipio requisito que en este caso sí se cumplió; como consta en acta de fecha febrero 6 de 2020.

Ahora, es importante determinar el cumplimiento del artículo 59 de la norma, respecto a la adopción de los criterios para la declaratoria de la calamidad pública, a saber:

(...)

*Artículo 59. Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:*

*1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas.*



**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños.*

*Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica.*

*3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres.*

*4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse.*

*5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia.*

*6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.*

*7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.  
(...)*

De acuerdo con el enunciado normativo citado, se tiene que las razones aducidas por el alcalde municipal para declarar la Calamidad Pública y urgencia manifiesta, se encuentran justificadas, pues éstas se encaminaron a proteger la salud y vida de los habitantes del municipio de San Pedro que se encuentran amenazados por la pandemia ocasionada por el virus COVID 19 en los cinco continentes incluido el territorio Colombiano, y de lo cual no se requieren pruebas, pues se han expedido alertas nacionales por el Ministerio de Salud y son de público conocimiento como dejaron registrado en el acta extraordinaria los miembros del CMGRD en fecha marzo 19 de 2020, este evento es calificado como calamitoso, con unas consecuencias graves de mortalidad en la población, y a efectos de actuar oportunamente toda vez que el primer contagio por el COVID – 19 fue el municipio de Guadalajara de Buga, municipio muy próximo al municipio de San Pedro, por lo que bajo estos argumentos se motivó el acto administrativo de declaratoria de calamidad y urgencia manifiesta, al ser una amenaza a la salud y vida de sus habitantes, provocando una emergencia sanitaria y epidemiológica que trastornaría el orden económico y social en ese municipio, como dan cuenta el acta de la Reunión Extraordinaria de Gestión Municipal del riesgo de esa municipalidad, recordemos que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020, el virus COVID-19 como una pandemia, lo cual de llegar afectar a la población de ese municipio o cualquiera otro puede producir unas consecuencias graves, como lo exige la norma para proceder a declarar la calamidad.

El Alcalde Municipal de San Pedro no hizo uso del fondo para atención de calamidad pública de que trata la Ley 1523 de 2012, y por tal razón invocó la figura de la urgencia manifiesta de que tratan los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 para afectar el sistema de contratación que llevó a cabo con los recursos públicos propios del presupuesto del municipio (rubro Programas de Apoyo de Salud en General) lo que se encuentra acorde con la norma, tal como se trata seguidamente.

En este punto considera el Despacho oportuno recordarle a la primera autoridad municipal de San Pedro- Valle, que tal como lo establece la Ley 1523 de 2012, debe crearse el fondo de atención para calamidades públicas, de ésta forma no se afecta directamente el presupuesto del municipio con la actividad contractual, sino el presupuesto autónomo del aludido fondo, conforme lo establecido en el artículo 66 que prescribe:

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*“Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993”.*

De conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, como regla general y expresión del principio de transparencia, la selección del contratista se celebra a través de licitación, Selección Abreviada, concurso de méritos, o mínima cuantía, según sea el caso. No obstante, el mismo cuerpo normativo prevé algunas excepciones que permiten contratar directamente, como en el caso de la urgencia manifiesta<sup>1</sup>.

*“La Urgencia Manifiesta es una figura precontractual valida de uso extraordinario o excepcional y se refiere básicamente a la necesidad de darle continuidad al servicio o precaver daños a la Administración o a los administrados ante la ocurrencia de eventos imprevistos de tal forma que concurren alguna de las causales previstas en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que dispone que esa figura tiene aplicación en los siguientes casos:*

- 1. Cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro.*
- 2. Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción.*
- 3. Cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden situaciones inmediatas.*
- 4. Cuando se trate de situaciones que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección”.*

Ahora bien, las alteraciones de la normalidad que constituyen el régimen de excepción, son únicamente las previstas en la Constitución, a saber:

- Guerra exterior (estado de guerra exterior).*
- Grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía (estado de conmoción interna).*
- **Perturbaciones graves e inminentes, del orden económico, social y ecológico del país, o hechos que constituyan grave calamidad pública** (estado de emergencia).*

*Y precisamente en Colombia, el presidente de la República expidió el Decreto N°417 de marzo de 2020 y el N°637 del 6 de mayo de 2020, Por los cuales se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional para atender la pandemia del COVID-19 en el país”.*

*Es así y a efectos de emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda se tendrá en cuenta inicialmente que la urgencia manifiesta es un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios con el propósito de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de conflicto o de crisis, son del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública, concurso de méritos es decir cuando la administración no cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas”.*

---

<sup>1</sup> Artículo 2 Numeral 4 Literal A ley 1150 de 2007

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE  
(MAYO 18 DE 2020)**

*Como bien se colige de la anterior definición, la ley señala unas exigencias específicas a la Administración para proceder a la declaración de la urgencia manifiesta, como son; las circunstancias o hechos excepcionales que le dan origen y la imposibilidad de acudir al mecanismo de la licitación pública o al trámite legal establecido para la contratación porque no cuenta con el plazo indispensable para adelantar el procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.*

*El artículo 41 de la ley 80 de 1993 literal 3 dispuso:*

*“En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante”.* (subrayas fuera de texto)

*En la ley en cita, en el párrafo del Artículo 42 establece:*

*“PARÁGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.*

*Es necesario, esgrimir que Artículo 7° del Decreto 440 de 2020, expresa que el hecho que da lugar a la declaratoria de la urgencia se entiende probado, tal como a continuación se observa:*

*“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente”.*

*De igual modo, se expresa frente al tema en el Artículo 7° del Decreto 537 de 2020*

*“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de Ley 80 1993, se entiende comprobado hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicio, o la ejecución obras en el inmediato futuro, con objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente.  
Las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa bienes y servicios enunciados en inciso anterior.”*

*Por su parte, dicho Decreto adicionó los incisos del párrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el siguiente sentido:*

*“Artículo 8. Adiciónese los siguientes incisos al párrafo del artículo 40 Ley 80 de 1993, Adición y modificación de contratos estatales. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación la situación emergencia con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación emergencia.*

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia de Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y durante el término que dicho estado esté vigente.”*

*Frente a la Urgencia Manifiesta, el Consejo de Estado ha sido claro en expresar que se permite la suscripción de contratos mediante contratación directa encaminados a superar la crisis, tal como se observa en Sentencia del 28 de junio de 2019, Consejero ponente Dr. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicado 11001-03-26-000-2012-00002-00:*

*“(…) Lo primero que debe indicarse, es que el ejercicio del control fiscal es una función constitucional asignada a la Contraloría General de la República por mandato expreso del artículo 267 Superior, que la define como la vigilancia de la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, la cual se efectúa en forma posterior y selectiva de acuerdo con los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.*

*Dicha función no es ajena al mecanismo excepcional de contratación previsto en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta, regulada en los artículos 41 a 43 de la Ley 80 de 1993, que permite la celebración de los contratos necesarios para superar situaciones de crisis, cuando en virtud de aquellas es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa<sup>2</sup>.*

*Al respecto se resalta el contenido de los artículos 42 y 43, que en su tenor literal rezan:*

*“[...] ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos.*

*La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.*

*PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. [...]”*

*“[...] ARTÍCULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.*

*Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia. [...]”*

*(Se destaca)*

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, sentencia del 7 de febrero de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado nro. 11001032600020070005500.



**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*Acorde con las disposiciones transcritas, la urgencia manifiesta (i) debe ser declarada mediante acto administrativo motivado, (ii) contener las razones para acudir a este instrumento excepcional y hacer referencia a los contratos que se suscribirán, señalando su causa y finalidad.*

*Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que “[dada la mayor autonomía con que se dota a las autoridades administrativas, para afrontar situaciones de urgencia y excepción, la vigilancia sobre las actuaciones que se deriven de su declaratoria, deberá ejercerla el organismo de control de manera especial e inmediata, según lo establece el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. [...].”*

*En ese orden de análisis, la Sala encuentra que la competencia por parte de la autoridad encargada del control fiscal, en el marco de la declaratoria de la urgencia manifiesta, se circunscribe a hacer la correspondiente verificación jurídica, que a su vez habilita al mismo ente de control para ejercer las funciones a su cargo, así como las asignadas a la Procuraduría General de la Nación, las cuales detentan la vigilancia de la gestión contractual, según lo establece el Título VII de la Ley 80 de 1993, en particular los artículos 62 y 65 ibídem, que disponen:*

*“[...]*

*ARTÍCULO 62. DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. La Procuraduría General de la Nación y los demás agentes del ministerio público, de oficio o a petición de cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.”*

*“ARTÍCULO 65. DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN CONTROL FISCAL. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales. (...)*

*[...]” (Negrita de la Sala)*

*Así las cosas, la interpretación armónica de las disposiciones del Estatuto de Contratación, permiten afirmar que el pronunciamiento que haga el organismo de control fiscal en virtud de lo señalado por el artículo 43 ejusdem, no constituye una decisión de fondo, sino que se trata de un acto de trámite, puesto que a partir de los hallazgos que advierta, pueden o no derivarse el inicio de las investigaciones de orden fiscal o disciplinario.”*

*“(...)”*

*Los otros requisitos formales exigidos por el legislador están presentes en el artículo 43 de la Ley 80 y se relacionan con el tema del control fiscal. **Así, después de celebrados los contratos que se originen en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviarán a la autoridad competente para realizar el control fiscal, con el objeto de que esta investigue si fue o no procedente su declaratoria, éste funcionario tendrá dos meses para pronunciarse.***

*A juicio de la Sala, **el ejercicio de este control implica la verificación de la ocurrencia de unos hechos, no el examen de las causas que los generaron. Así, si el órgano de control encuentra que los hechos que sirven de fundamento a la declaración de urgencia manifiesta si ocurrieron y que se ajustan a los presupuestos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, dicha declaración será conforme a derecho.** Ahora bien, esta modalidad de control fiscal resulta de gran utilidad, ya que puede impulsar la realización de otras investigaciones de tipo penal o disciplinario.*

*2.3. Para esta Sala, es importante señalar que la urgencia manifiesta, aunque implique la posibilidad legal para celebrar contratos de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia puede convertirse en una regla general o en un instrumento discrecional en manos de las autoridades públicas, todo lo contrario, su aplicación es de derecho estricto y procede previa configuración real y efectiva de las precisas causales que el legislador establece en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.*



**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*En conclusión, la contratación por la vía de urgencia no puede ser una contratación abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal, es decir, se debe garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del contrato y el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen servicio público a los administrados.”*

Por lo anterior, es oportuno recordarle a la primera autoridad municipal de San Pedro – Valle del Cauca, que si bien la contratación directa permite prescindir del procedimiento formal de la licitación pública, con todas las etapas y requisitos que ella exige, tal circunstancia no exime al administrador público del deber de efectuar una selección objetiva del contratista y de respetar los principios que regulan la contratación estatal como son los de transparencia, economía y responsabilidad, al lado de los principios de planeación, libre concurrencia, buena fe, y en general aquellos que rigen el ejercicio de la función administrativa.

Como el número de contratos de prestación de servicios fue mayor, resulta oportuno referirnos a los mismo, pues en tratándose de este tipo de contratos en **Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera**, Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Rad. 24.715 y otros Acu. Cp.- Ruth Stella Correa Palacio concluyó:

*"... Las características de los contratos de prestación de servicios en cualquiera de sus modalidades a la luz del artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 se caracterizan de la siguiente manera:" ... a). Podemos ser celebrados por cualquier entidad estatal que tenga capacidad para contratar, según lo previsto en el artículo 2 numeral 1. de la Ley 80 de 1993.*

*B). Es posible su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con personas naturales cuando se trata de desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad que no pueden desarrollar con personal de planta o requisitos específicos. Y, sin importar que la norma no lo señale, es conforme a derecho concluir que también es admisible suscribir este tipo de contratos con personas jurídicas, como así lo indica el artículo 24, numeral 1º, letra d), en el cual se señala la posibilidad de acudir a los mismos "[p]ara la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden abarcar a personas naturales o jurídicas (...)"*

*C). Tienen por objeto desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad contratante, con la condición de que ciertos actividades o funciones no pueden cumplir con el personal de la planta por ser insuficiente o porque se requieren conocimientos especialistas.*

*re). La relación que se genera entre entidad contratante y contratista no goza del carácter de relación laboral.*

*mi). No pueden pactarse por plazo indefinido, sino por el plazo estrictamente necesario e indispensable (inciso 2º. Del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993).*

*Precisamente, la naturaleza excepcional de este negocio jurídico de la administración y las dos últimas características anotadas previenen que no se utilizará el contrato de prestación de servicios para establecer plantas paralelas con carácter permanente en las entidades públicas, en el desconocimiento del régimen laboral, tal y como lo ha publicitado esta Corporación al recalcar que no puede suplirse la vinculación de los servidores públicos a los cuadros del servicio oficial a través de estos contratos.*

*F). En el marco de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebran las entidades públicas –incluyendo los servicios de prestación de servicios- se rigen por las disposiciones civiles y comerciales que disciplinan el tipo negociable utilizado por la administración y las especialidades en dicho estatuto público contractual (artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993).*

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

*sol). No son obligatorias las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilateral, de algún acuerdo a las leyes nacionales y de caducidad, salvo en materia de prestación de servicios públicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pero no hay obstáculo para que si se estima conveniente se puedan pactar.*

*De otra parte, el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que en el ordinal 1º establece los precisos eventos en los que la escuela del contratista puede establecer directamente, en la letra d) señala como uno de ellos "la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden abarcar a personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas y tecnológicas. "De esta norma del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública puede colegirse que los únicos contratos de prestación de servicios que permiten ser celebrados en forma directa involucrados en estas actividades: i) los profesionales, esto es, los que se prestan por personas que ejercen especialmente una profesión; ii) las obras artísticas, es decir, relacionados con trabajos en las artes; y iii) las que manejan el desarrollo director de actividades científicas o tecnológicas.*

*Como puede apreciarse, el contrato de prestación de servicios, en las voces del artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, es una manera de vincular a los particulares para desarrollar actividades relacionadas con la administración y el funcionamiento de la entidad y si bien que involucren servicios profesionales o ejecución de trabajos artísticos o el desarrollo de actividades artísticas se subsumen en una causal de contratación directa..."*

Bajo la anterior referencia jurisprudencial, se tiene que los contratos UM-04-2020; UM-05-2020; UM-06-2020; UM-08-2020; UM-09-2020 y UM-10-2020, suscritos por prestación de servicios y su modalidad de contratación es la directa, nos referiremos a éstos de manera tangencial, indicando que estos se contrataron con el único objeto de: *"Prestación de servicios de campañas de prevención para la mitigación del riesgo de contagio del virus COVID 19 en la comunidad San Pedreño"*, con personas de las cuales no se aportó hojas de vida, ni documentos necesarios para la suscripción de un contrato estatal; El valor pactado por cada uno de los contratos es de \$4.500.000, con un plazo de ejecución de tres meses, siendo el promedio mensual de \$1.500.000, sin los descuentos de Ley, un valor pagado por debajo de la tabla de valores de referencia fijados por la Gobernación del Valle a contratos de prestación de servicios con actividades asistenciales para el 2020, y la fija mediante circular N°520726 de marzo 2020, oscila entre \$1.650.000 y \$2.010.000 pesos dependiendo el grado de escolaridad.

El contrato N°UM-01-2020 suministro de elementos e insumos necesarios para realizar las acciones de prevención, contención y mitigación de la emergencia sanitaria por COVID-19, adquiriendo tapabocas, jabón líquido, guantes, alcohol toallas desechables entre otros insumos.

Los contratos N°UM-03-2020 y N°UM-07,-2020 se pactó en el primero a prestar servicio de desinfección a las entradas del municipio a vehículos y personas, y el segundo contrato alquiler de un baño portátil para las personas que prestaban servicios de información de la pandemia.

Se adquirieron Kits de alimentos para la población vulnerable según objetos contractuales del contrato N°UM-02-2020 firmado el 24 de marzo y el N°UM-11-2020 del 23 de abril, cuyo valor pactado varía de un mes a otro sin justificarse de este contrato solo se aportó el Estudio Previo.

El Contrato N°UM-12-2020, lo suscribe con Colomboquímicos farmacéuticos para dotar al Hospital de equipos y éste pudiera atender los posibles infectados por el COVID-19, implementos a saber:

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

Carro de paro en plástico; Desfibrilador minday beneheart d3 con marca pasos pantalla 7”; Electrocardiógrafo serie 301 de 3 canales, con pantalla táctil y a color alta resolución; y tres bombas de infusión en un canal sk. contrato al que también solo se adjuntó el estudio previo.

Todos los contratos y aquí relacionados y allegados a éste Órgano de Control en medio digital, no se les anexó información de los contratistas, no justifican los criterios para seleccionar contratistas en aplicación al principio de selección objetiva, sobre la compra de kits alimenticios, no se identifica la población vulnerable con base en la cual se determinó el número de mercados, así mismo no se evidencian cotizaciones o fuentes de información sobre los precios cotizados para determinar el valor de cada uno de los contratos celebrados, no se puede por el Despacho verificar la idoneidad y experiencia de los contratistas que garanticen el cumplimiento efectivo del objeto contractual.

En este punto es oportuno remitirnos al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, cuando establece en su artículo 3, sobre los principios que regulan las actuaciones administrativas, en los siguientes términos:

*“Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.*

*Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.*

***Numeral 4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.”.***

Bajo este principio y como quiera que no se anexó ninguna información de los contratistas, si tienen o no alguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar (pese a que en la cláusula 15 del contrato, el contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad, al firmar el contrato), aplicaremos el principio antes descrito en el entendido que la Entidad contratante verificó tales condiciones para ejecutar en forma eficiente y adecuada los compromisos asumidos.

Teniendo en cuenta que el grupo de trabajo 2 estará dirigido a ejercer el control y seguimiento a la contratación efectuada como consecuencia de la declaratoria de urgencia manifiesta y/o calamidad pública efectuada por los sujetos de control, teniendo la facultad de poder solicitar todos los documentos soportes de la contratación y hacer la respectiva visita fiscal.

Por lo cual considera este Despacho, se hace necesario que esta contratación se traslade al GRUPO DE REACCION INMEDIATA (GRI) EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS CON RELACION AL COVID 19, conformado mediante Resolución N°006 de abril 16 de 2020 para que haga una auditoria en la verificación de la ejecución de estos contratos, pese a dársele concepto favorable al pronunciamiento de urgencia, con la finalidad de hacer un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados a cada proceso de contratación, adicional a lo anterior efectuar un seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendadas al contratista, en el marco de la emergencia.

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

Considera el Despacho igualmente, que debe enviar copia de este pronunciamiento y documentos aportados por el municipio de San Pedro para el pronunciamiento a que está obligado éste Órgano de Control; a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía, como quiera que es de público conocimiento al ser noticia nacional, las acciones penales y disciplinarias adelantadas en contra del Alcalde del Municipio de San Pedro, su jefe Jurídico y el Contratista CARLOS ANTURO LONDOÑO MARIN, por la presunta suscripción de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, respecto de los contratos de los contratos N°UM 02-2020 y N°UM11-2020, cuyo objeto es la **“COMPRAVENTA DE KITS DE ALIMENTOS PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DPTO. DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO AL DECRETO NUMERO 046 DEL 23 DE MARZO DEL 2020 Y EL PLAN DE ACCIÓN COVID-19 APROBADO POR EL CONCEJO MPAL DE GESTION DEL RIESGO**, para que si lo consideran pertinente sirva de material probatorio en esas investigaciones, en aplicación del principio de colaboración armónica entre órganos de control.

Para terminar, es oportuno indicar que el contrato UM-011 -2020 su fuente de financiación 0023 de Regalías por valor de \$96.238.000, situación que utilizó el Alcalde con base en el artículo 5° del Decreto 513 de 2020 donde se dispuso que

*“... en virtud de lo dispuesto en el presente decreto legislativo entidades territoriales podrán presentar proyectos de inversión que tengan por objeto la implementación de las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria o de emergencia, así como conjurar y evitar su agravamiento e impedir la extensión de sus efectos. Sólo se podrán financiar inversiones relacionadas con: (i) Atención en salud y protección social; (ii) Agricultura y desarrollo rural; (iii) Suministro de alimentos y recurso hídrico; (iv) Asistencia alimentaria a la población afectada por las causas de la emergencia; y (v) Garantizar la efectiva continuidad y calidad en la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como asumir el costo del alumbrado público”, por lo que su revisión compete a la CGR, quien es la encargada de auditar los dineros de las Regalías, según lo preceptuado en el artículo 152 de la Ley 1530 de 2012, que establece:*

**“ARTÍCULO 152. VIGILANCIA Y CONTROL FISCALES.** *En desarrollo de sus funciones constitucionales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia y el control fiscales sobre los recursos del Sistema General de Regalías”.*

Así las cosas, el estudio realizado y la prueba de los hechos aportados a este ente de control permite evidenciar que la primera autoridad municipal contó con los criterios suficientes para sustentar un concepto favorable frente a la contratación llevada a cabo y que además se encuentra proyectada en el plan de Acción Especifico realizado y actualizado 18 y 19 de marzo de 2020 respectivamente, realizado para atender la calamidad, y como quiera que comportan características de inmediatez, como lo presupone el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, por consiguiente obrando dentro del término legal contemplado en la ley se emite este concepto sin perjuicio de las acciones y resultados que produzca el ejercicio directo de control fiscal que se llegue a realizar por los funcionarios o autoridades en el marco de sus competencias.

## **V. CONCEPTO**

Con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de este documento, por satisfacer los presupuestos que para la declaratoria de Calamidad y Urgencia Manifiesta que exige la Ley 80 de 1993, Ley 1523 de 2012 y la Ley 1150 de 2007 respectivamente, en razón a la circunstancia que presidieron su declaratoria y la celebración e iniciación de los contratos fruto de tal declaratoria, este organismo de control con fundamento en el Art. 43 de la Ley 80 de 1993 emite el siguiente concepto:



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°012 -2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE (MAYO 18 DE 2020)**

**PRIMERO:** Concepto **FAVORABLE** en la utilización de esta figura excepcional que motivó el acto administrativo mediante el cual fue declarada la Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta, respecto de los hechos y circunstancias que determinaron la declaración y de los contratos suscritos; por cuanto se ajustan a los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo expuesto en los considerandos. Sin embargo, frente a los contratos se deberá tener en cuenta las observaciones manifestadas en las consideraciones del despacho.

**SEGUNDO:** En cumplimiento a lo consignado en la parte considerativa de este pronunciamiento, se debe **ENVIAR** la contratación realizada en el marco de la presente Calamidad y Urgencia Manifiesta, al Grupo dos de trabajo de Reacción Inmediata de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca (GRI), conformado mediante la Resolución Reglamentaria N°006 del 16 de abril de 2020, para lo de su competencia.

**SEGUNDO:** **COMPULSAR** copia del presente pronunciamiento a la Procuraduría Provincial Cartago, conforme a lo manifestado por este Despacho en sus consideraciones.

**TERCERO:** En cumplimiento a lo consignado en la parte considerativa de este pronunciamiento, se debe **ENVIAR** la contratación realizada en el marco de la presente Calamidad y Urgencia Manifiesta, al Grupo dos de trabajo de Reacción Inmediata de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca (GRI), conformado mediante la Resolución Reglamentaria N°006 del 16 de abril de 2020, para lo de su competencia.

**CUARTO:** El anterior concepto se emite sin perjuicio a que esta Contraloría en el ejercicio del control fiscal constitucional, pueda ejercer vigilancia a través de los respectivos funcionarios, en ejercicio del Control Posterior a los contratos objeto de este estudio y los que se lleguen a suscribir, en la línea de legalidad y gestión, que complementa el procedimiento de vigilancia fiscal, tal como lo precisó el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de marzo 24 de 1995, Rad.677, Consejero Ponente Luís Camilo Osorio.



LEONOR ABADIA BENITEZ  
Contralora Departamental del Valle del Cauca

**LEONOR ABADIA BENITEZ**  
Contralor Departamental del Valle del Cauca



**CLAUDIA JOHANA LUNA GIRALDO**  
Jefe Oficina Jurídica

|   | Nombre                      | Cargo                      | Firma |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Proyectó</b>   | Rosa Liliana Ogonaga Antury | Profesional Universitario. |       |
| <b>Revisó</b>   | Claudia Johana Luna Giraldo | Jefe Oficina Jurídica      |       |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. |                             |                            |       |